

Fortalecer el marco regulador..

Un ajuste necesario

La garantía de que el proceso funcione se encuentra en contar con sistemas de regulación auténticamente independientes, no capturados, enteramente despolitizados, con superintendentes nombrados de acuerdo a la carrera que hayan desarrollado, sin vínculos con partidos políticos, sin haber pertenecido en su vida laboral a la industria que ahora regulan. El personal técnico tampoco tiene que verse en la incomoda situación de responder a los intereses del partido de turno, o a los jefes que los fuercen a adoptar posiciones en contra de los consumidores o, en su caso, las propias empresas; en suma aquellas personas que tengan la suficiente entereza para afrontarse a las transnacionales.

Miguel Ángel Dunga

Repsol y sus 16 secuaces, el enredo Garafulic – LAB – Asbun, la baja rentabilidad de las empresas capitalizadas, han causado desencanto, sorpresa y hasta revuelo en el país. Así la gente se divide entre aquellos que piensan que tal enredo no es más que un pequeño problema que responden a un mal momento que estarían atravesando las capitalizadas, el cual requiere algunos ajustes, pero en conjunto, no exige cambios trascendentales.

En el otro bando, se encuentran los que piensan que ésta es una muestra más de los pobres resultados del negocio capitalizador. Sin embargo, la crítica es mucho más profunda de lo que a primera vista parece; apunta a lo que fue el principal argumento para las privatizaciones: la eficiencia asociada a la transparencia, concepto que se convirtió en el ícono que, a manera de

estandarte, barrió con toda la resistencia en contra de las privatizaciones en América Latina.

Las empresas estatales y la eficiencia

¡Las empresas estatales son ineficientes por naturaleza! Tal afirmación corresponde al credo liberal que con gusto llevaron adelante numerosos gobiernos en la década de los ochenta. Sus bases son sencillas: asumen que lo que mueve a las personas a producir eficientemente es el interés personal íntimamente ligado a la propiedad. La sabiduría popular indica que nadie engorda mejor al ganado que el propio dueño. Tal credo es elevado a rango de ciencia, convirtiéndose en una verdad absoluta e indiscutible que señala el mejor rumbo para lo que un buen gobierno debe hacer con las empresas estatales.

No obstante, en honor a la verdad, pruebas no faltaron. En América Latina y en especial en Bolivia, durante décadas se mantuvieron empresas que obtenían rentabilidades ínfimas, ayudadas por ingeniosas contabilidades, en el mejor de los casos; o por el contrario, éstas se encontraban en situaciones donde la verdad no podía ocultarse durante mucho tiempo, reportando cuantiosas pérdidas.

Se aducía que las empresas estatales no sólo tenían objetivos económicos sino también sociales. Así cuando se instalaba una empresa proveedora de agua no se la ensamblaba con el propósito de recuperar la inversión en el menor tiempo posible, sino con el noble objetivo de proveer un servicio básico a quienes más lo necesitaban.

Pero, ninguna empresa puede vivir de la filantropía. Es posible proveer un servicio a un precio por debajo del costo real de producirlo, pero los costos que asumidos deben ser cubiertos, deben salir de algún lado. En el caso del Estado durante mucho tiempo se sustrajeron recursos de otras actividades para financiar los crecientes déficit, porque todo costo debe ser cubierto por un ingreso.

Privatización y eficiencia

El puntal de ataque contra las estatales fue la corrupción que las caracterizaba. Los administradores ocasionales buscaban enriquecerse en el menor tiempo posible y así éstas rápidamente se convirtieron en botines de guerra gustosamente disputados por potenciales administradores que, a su turno, desfalcaban el botín en beneficio propio.

Sin embargo, ahora se evidencia que tampoco las privadas nacionales o extranjeras pueden ufanarse de estar enteramente limpias de estos procesos. Primero, fue Enron la que demostró que las empresas privadas también son susceptibles de pecar y no tienen aureola que les impida corromperse. Frente a la contabilidad creativa por la que optaron poderosas transnacionales le dieron un gracioso significado a la palabra “maquillaje”: mostrar una empresa en bonanza cuando está al borde de la quiebra.

En nuestro país Repsol, una de las socias de las capitalizadas, vino a demostrar que no son la excepción que confirma la regla. Después de suspender a sus 17 funcionarios, mostró que el tráfico de influencias puede existir al interior de las empresas privadas. Reeditaron una vieja práctica que se creyó eliminar con las privatizaciones: las adquisiciones vinculadas a la otorgación de beneficios de los ocasionales administradores.

Pero no sólo eso, también se vio que estas empresas pueden engañar a sus accionistas mostrando bajas o nulas rentabilidades. Ciertamente, sin pruebas, es difícil argumentar que tal cosa esté sucediendo en las capitalizadas. Sin embargo, sí se tiene la sospecha de que las empresas están declarando menos de lo que realmente perciben. Se debe a que no existe ningún mecanismo de control que dé la seguridad a los accionistas de que están declarando, lo que realmente ganan.

Podría argumentarse que son negocios privados y que nadie tiene el derecho de inmiscuirse en tales situaciones. Los que así piensan olvidan que las capitalizadas no son haciendas que pueden manejarse a gusto y sabor de los terratenientes, son sociedades anónimas, es decir emiten acciones a favor del público. Público que tiene el derecho de recibir toda la información que requiera. Y por si fuera poco, aunque no fuesen S.A., en esta época de defensa del consumidor tienen que superar la imagen y ser verdaderamente honestas y transparentes.

La regulación, algo más que un bonito adorno

Si el diagnóstico es el correcto, nos encontramos en un callejón sin salida, empresas eficientes no son las privadas ni las estatales, por que el sistema es corrupto por naturaleza. Sabrosa afirmación que podría llevarnos a intrigantes conclusiones sobre lo que se debe o no dejar de hacer con el capitalismo. Aparte de ahorrarnos

¿Existe el peligro de sobre-regulación?

La *regulitis* es una enfermedad propia de aquellos países en los cuales se comprueba que los mercados no dan la más mínima señal de ser eficientes, en ellos se asume que el Estado, la sociedad civil, los partidos, las organizaciones obreras, los clubs de madres, deben intervenir para controlar a las empresas.

Tal enfermedad hace que los mercados se obstruyan, y lo que es peor no asignen eficientemente los recursos generando privilegios para pequeños grupos que viven alimentados de las arcas del Estado.

Un buen sistema de regulación debe partir del principio de que es el mercado el que debe dar las señales y guiar el funcionamiento de la economía. Así por ejemplo en el caso de las capitalizadas es imprescindible que las acciones se coticen en mercados desarrollados, los cuales por su naturaleza exigen una mayor transparencia.

Sin embargo, dichos procesos requieren un periodo de tiempo para ser implementados. Se calcula que llevar las acciones a Wall Street tomaría entre un año y dos. Pero, aunque tal cosa se pudiese hacer de un día para otro, no implica que no se deba desarrollar buenos sistemas de regulación.

Ciertamente no es bueno volver a los tiempos en que el Estado decidía todo en materia económica, pero tampoco es aconsejable pensar que es el mercado puede solucionarlo todo. Bolivia no tiene mercados desarrollados, y mientras tal cosa no cambie, es imperioso que el Estado colabore en su construcción. Tal tarea corresponde al Estado regulador. En el futuro cuando se disponga de mercados de capitales parecidos a los de los países más adelantados, la regulación tendrá un lugar distinto.

No existe el peligro de la sobre-regulación, el país ha avanzado en la consolidación de muchas instituciones, más allá del discurso anti-neoliberal. Amplios grupos de la sociedad, consideran que pese a todo el camino se encuentra en la senda del libre mercado. Si esto es así, también se asume que los reguladores son complementarios. Lo que sucede es que en la última década se asumió esta verdad con tal fanatismo, que la regulación se convirtió en un bonito adorno.



el arduo trabajo de indagar más sobre el tema, con lo que la discusión quedaría saldada.

Sin embargo, lo cierto es que ni las estatales ni las privadas son eficientes por su naturaleza jurídica. La propiedad tiene muy poco que ver con este concepto. Tal situación no ha sido siempre así. En los albores del capitalismo, cuando eran pequeñas empresas las que competían por un estrecho mercado, podía verse a empresarios desviviéndose por mantener a flote a sus negocios. En tales tiempos, era lógico pensar que la propiedad y el interés individual explicaban en gran medida los motores del naciente capitalismo, tal como lo ilustraron Adam Smith y David Ricardo.

Pero, con el tiempo, tal forma de pensar se tornó insuficiente para explicar las nuevas situaciones: el tamaño de las empresas creció notablemente, por lo que, así se tuviera el más diligente de los empresarios, sería virtualmente imposible que observe todas y cada una de las acciones que impulsen el avance de su empresa. Además, el avance de las formas de financiamiento de las corporaciones hizo que se diluyese el concepto clásico de propiedad. Las sociedades anónimas tienen millones de propietarios, que difícilmente pueden seguir, paso a paso, la marcha de una empresa.

De esta manera, la diferencia entre una gran transnacional y una empresa estatal se hace cada vez más tenue, al menos en términos de propiedad. Por tal motivo, las prácticas que se creía sólo eran propias de las estatales se dan en las privadas. Tal como lo muestra el LAB: un administrador ocasional de la AFP Previsión utilizó información privilegiada para realizar un buen negocio, adquirir la mitad del paquete accionario por la irrisoria

suma de 10 millones de dólares, con reminiscencias de los viejos tiempos de las estatales.

Ante tal situación, se puede pensar que no existe otra alternativa que la de hacer saltar en pedazos la sociedad, para poderla reconstruir sin volver a equivocarnos. En realidad, la solución no es tan drástica. Para empezar, se debe comprender que el supuesto de que todos los agentes buscan su propio beneficio, es una herramienta útil para salir del embrollo.

Si todas las personas buscan su propio beneficio, quiere decir que actúan como el honrado hombre, seguro de sus principios morales. Frente al arca abierta repleta de diamantes, sacrifica la moral por mejores días para los suyos, llenándose los bolsillos de la mayor cantidad de diamantes que pueda.

Es decir, en la medida que se dejen resquicios para que florezcan tales actitudes, se seguirá lamentando por los mismos problemas hasta ahora vistos. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación? La respuesta mágica es *regulación*. Se puede aducir que desde 1995 el país está empeñado en el tema con pobres resultados, lo cual es relativamente cierto. No obstante, como todo proceso, requiere un periodo de aprendizaje en el cual, lamentablemente, ni los sucesivos gobiernos ni los propios superintendentes están haciendo el más mínimo esfuerzo (con las honrosas excepciones lógicamente) por acelerarlo sólidamente.

La regulación genera el marco en el cual pueden moverse las empresas, define lo que pueden y no pueden hacer, garantiza el flujo de información hacia los accionistas y los consumidores. En definitiva, busca evitar que el arca se encuentre abierta frente a los administradores o, en los casos

en que tal cosa no se pueda evitar, actúa con todo el peso de la ley para sancionar a las corporaciones o individuos que infrinjan las reglas trazadas.

La garantía de que todo el proceso funcione está en contar con sistemas de regulación auténticamente independientes, enteramente despolitizados, con superintendentes nombrados de acuerdo a la carrera que hayan desarrollado, y no en función del número de paredes que hayan pintado en campaña para optar a cargos. Con personal técnico que tampoco tenga que responder a los intereses del partido de turno. En suma aquellas personas que tengan la suficiente entereza para afrontarse a las transnacionales y a las empresas nacionales con aspiraciones de "holdings".

Unido a este proceso, se debe evitar que sean las propias empresas las que financien a los entes reguladores. Tal situación genera problemas de riesgo moral que pueden y deben ser evitados. El propio Ministerio de Hacienda podría hacerse cargo de ser el agente de cobranzas de las superintendencias, para lo cual se puede establecer una cuenta especial (que sea intocable) así el sistema de regulación continuaría contando con un presupuesto autónomo. Ciertamente la idea es que los organismos reguladores sean independientes del poder ejecutivo, pero el riesgo es menor que el que se presenta al estar tan cerca de las transnacionales.

Hoy más que nunca el reto está planteado para la actual administración gubernamental, o se toma en serio la regulación de las capitalizadas superando la situación actual de tener a las superintendencias como un bonito adorno, o es posible que la capitalización se convierta en lo que siempre presintieron sus detractores: "en el peor negocio de la historia boliviana" ■

¿DESEA PUBLICAR UNA RESEÑA?

y finanzas, marketing, derecho, medicina, endología, sistemas, salud, ecología, estadística, arquitectura, arte, agronomía, urbanismo, y finanzas, marketing, endología, sistemas, salud, ecología, estadística, arquitectura, arte, agronomía, urbanismo, y finanzas, marketing, derecho, medicina, endología, sistemas, salud, ecología, estadística

alamandra
LIBROS Y LITERATURA

publicidad@pulsobolivia.com • 2313418